

Doctor
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
PRESIDENTE
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad

REF: Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de Ley No. 019 de 2011 Cámara “Por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones”

SÍNTESIS DEL PROYECTO

El Proyecto de Ley que se somete a consideración de la Honorable Cámara de Representantes tiene como finalidad la derogatoria de la actual normativa relacionada con el arancel judicial prevista en la Ley 1394 de 2010 y en su lugar, expedir una nueva ley que regule esta materia.

Con esta iniciativa se pretende hacerle frente a las dificultades que de orden práctico, se han presentado en la aplicación de la Ley 1394 de 2010, con el fin de contribuir al fortalecimiento del procedimiento de recaudo del arancel judicial.

TRÁMITE DEL PROYECTO

Origen: Ministerio de Justicia y del Derecho (antes Ministerio del Interior y de Justicia).

Primer Debate: El Proyecto de Ley fue aprobado en Primer Debate por la H. Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes 4 de octubre de 2011.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El Proyecto de Ley consta de la siguiente estructura:

CAPITULO I	DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Gratuidad de la justicia.	Ratifica el principio general de gratuidad a la justicia, con la posibilidad de establecer, entre otros, aranceles judiciales.
Artículo 2. Naturaleza jurídica.	Define la naturaleza jurídica del arancel judicial como contribución parafiscal.

Artículo 3. Sujeto activo.	Establece como sujeto activo del arancel judicial al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Artículo 4. Hecho generador.	Define el hecho generador del arancel judicial.
Artículo 5. Sujeto pasivo.	Establece quién es el sujeto pasivo de la contribución, así como algunas excepciones a tal condición.
Artículo 6. Base gravable.	Sienta las bases para el cálculo de la base gravable del arancel judicial.
Artículo 7. Mod. Artículo 211 del C. de P. C.	Modifica el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil en relación con el juramento estimatorio.
Artículo 8. Tarifa.	Establece la tarifa del arancel judicial en el dos por ciento (2%) de la base gravable.
Artículo 10. Falta disciplinaria.	Contempla el principio de no discriminación de procesos judicial por razón de la causación y pago del arancel judicial.
Artículo 11. Destinación, vigencia y recaudo.	Define cuál debe ser la destinación de los recursos obtenidos como consecuencia del recaudo del arancel judicial.
Artículo 12. Seguimiento.	Estipula la forma como se le hará seguimiento al recaudo y destinación de los recursos obtenidos del arancel judicial.
Artículo 13. Régimen de transición.	Define el régimen de transición aplicable a las demandas presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
Artículo 14. Vigencia y derogatorias.	Momento a partir de la cual empieza a regir la ley y las derogatorias.

COMENTARIOS DE LOS PONENTES

A. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difícil situación por la que atraviesa la Administración de Justicia es en la actualidad uno de los temas de mayor trascendencia para el país. La preocupante congestión de los despachos judiciales, así como la lentitud (falta de celeridad) en la solución de las diferentes controversias que se someten a la decisión de la administración de justicia, constituyen los principales problemas de la rama judicial.

En efecto, en la justificación del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Nacional, al igual que aparece consignado en el Proyecto de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, se describen algunos índices y situaciones que dan cuenta del estado actual cosas de la administración de justicia en el país. Veamos:

- ✓ El inventario de procesos pendientes de ser decididos por la rama judicial, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para el mes de diciembre de 2010, asciende a dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil (2.649.000). Esta cifra da cuenta de la evidente congestión presente en los Despachos judiciales del país.
- ✓ En cuanto a la (falta de) celeridad en resolver las controversias sometidas a decisión de los jueces de la república, las cifras y estadísticas son francamente alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo con información suministrada por Asobancaria, un proceso ejecutivo hipotecario tarda

en promedio seis punto seis (6.6) años, existiendo casos en los que dichos procesos pueden durar hasta diez (10) años.

- ✓ Por otro lado, índices internacionales muestran un evidente rezago de Colombia en lo que tiene que ver con la resolución de controversias, tanto a nivel mundial como comparativamente con países de la región o, incluso, con un nivel de desarrollo inferior al nuestro. Así, como se mencionó en la Justificación del Proyecto presentado por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el estudio *“Doing Bussines 2011”* elaborado por las Naciones Unidas, en lo que tiene con el sub – sub -indicador de celeridad, Colombia tarda 1.346 días en ponerle a fin una típica controversia relacionada con la resolución de un contrato de compraventa de mercancías. Tal situación conlleva a ser ubicados en *“el puesto 178 entre 183 países, superando solamente a India (1.420 días), Bangladesh (1.442 días), Guatemala (1.459 días), Afganistán (1.642 días) y Surinam (1.715 días). Es decir, la colombiana es la sexta justicia más lenta del mundo y la tercera justicia más lenta de América Latina y del Caribe. Todos los países africanos examinados, por ejemplo, administran justicia de manera más célere que Colombia en la resolución de la controversia comercial tipo que atrás se mencionó”*.
- ✓ El mismo estudio mencionado *–Doing Bussines 2011–*, en relación con el sub – indicador de eficiencia de la justicia, ubica a Colombia en el puesto 150 en un ranking de 183 países y el puesto 25 en América Latina y el Caribe entre 32 países Las estadísticas en lo que tiene que ver con la eficacia de la justicia,

Como lo menciona la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Nacional, son numerosos los potenciales efectos nocivos que pueden derivarse de la congestión judicial y la morosidad en la Administración de Justicia, por ejemplo:

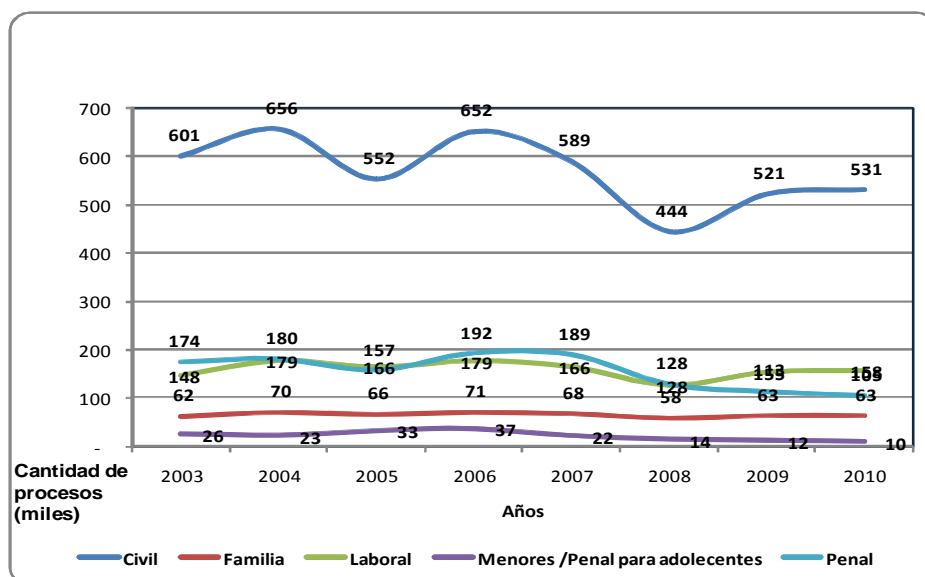
“La congestión judicial conlleva múltiples efectos negativos. Los más importantes, se pueden sintetizar, así:

- *Impide una oportuna solución de los conflictos, generando como consecuencia, en muchas ocasiones lo que se ha denominada “justicia por propia mano”.*
- *Obstaculiza la llegada de inversión extranjera al país.*
- *Agrava el “riesgo país”, pues se aumenta, en general, el costo de transar con empresas o personas de nuestra jurisdicción territorial.*
- *Aumenta la inseguridad jurídica.*
- *Estimula el incumplimiento de la ley o el contrato e “informaliza” las relaciones comerciales.*
- *Afecta el crecimiento de la economía y la competitividad del país.*
- *Genera desconfianza en la ciudadanía sobre el verdadero rol del Estado y la atención de las necesidades de los asociados.*

- Desprestigia las instituciones de justicia.
- Genera cultura de no pago o cumplimiento de las obligaciones¹.

Algunas cifras relacionadas con el inventario actual de procesos permiten identificar algunos aspectos relevantes, que sirve de sustento analítico para el presente Proyecto de Ley. En la Tabla No. 1 que se menciona a continuación, se puede observar el inventario de procesos discriminados por jurisdicción. De dicha información puede concluirse, entre otras, que es precisamente la jurisdicción civil, que se somete al pago del arancel judicial, la que mayor participación tiene dentro del universo de procesos judiciales activos en el país. Así, en relación con el inventario relacionado en la Tabla No. 1, para el año 2010 la jurisdicción civil participó con más del 70% de los procesos, para un total de 531.000 procesos activos para dicho año.

Tabla No. 1
Inventario de procesos por jurisdicciones



Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia².

A continuación, la Tabla No. 2 ilustra la composición del inventario dentro de la jurisdicción civil. Allí se observa que el 73% de los procesos de dicha jurisdicción corresponden a procesos ejecutivos, es decir, a trámites judiciales con pretensiones económicas, los cuales son precisamente los que se incluyen en el arancel judicial.

¹ Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 019 de 2011 Cámara "Por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones"

² Gestión en la Jurisdicción Ordinaria. Corporación Excelencia en la Justicia. 2010

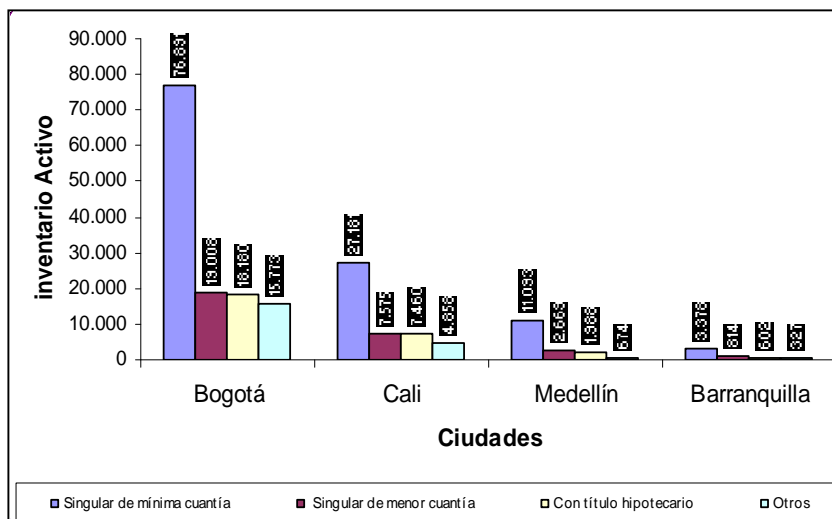
Tabla No. 2
Distribución del Inventario en la jurisdicción civil



Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

Los siguientes datos, ilustrados en la Tabla No. 3, evidencian la distribución geográfica (cuatro principales ciudades del país) del inventario judicial de procesos ejecutivos:

Tabla No. 3
Distribución por ciudades de procesos ejecutivos



Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia

Con todo, puede afirmarse sin temor a equívocos, que existe en la actualidad un alto grado de consenso –si no unanimidad-, en cuanto a la necesidad de adoptar medidas de fondo tendientes a garantizarles a los ciudadanos una administración de justicia pronta y eficaz. Una de estas medidas, importante pero no la única, es precisamente dotar de mayores recursos a la Administración de Justicia

para el cumplimiento de sus funciones. Así pues, el presente Proyecto de Ley está precisamente dirigido a lograr este cometido -una mayor consecución de recursos para la rama judicial-, a través del fortaleciendo del arancel judicial como fuente alternativa de financiación de la rama judicial.

B. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARANCEL JUDICIAL

Debemos comenzar por mencionar que, en estricto sentido, la gratuidad de la justicia es un principio de orden legal y no constitucional, el cual se encuentra regulado el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El principio de gratuidad, en su concepción inicial, se consagró por el legislador así:

***“Artículo 6.** La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales”.*

Como puede verse, si bien es cierto la idea primigenia del principio de gratuidad de la justicia no era absoluto, también lo es que las excepciones que aparecían relacionadas constituían gastos que directa o indirectamente incurrieran debían soportar las partes durante el curso del proceso, pero no se hacía mención alguna al establecimiento de alguna carga fiscal o parafiscal para las partes en beneficio de la Rama Judicial.

No obstante lo anterior, el arancel judicial no es un tema novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. De tiempo atrás, el Congreso de la República consideró oportuno establecer el arancel judicial como una excepción adicional al principio de gratuidad de la justicia, en un primer momento a través de la reforma adelantada a la Ley 270 de 1996 –*Ley Estatutaria de Administración de Justicia*-, llevado a cabo a través del Proyecto de Ley No. 286 de 2007 Cámara - 023 de 2006 Senado, “*Por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia*” y, posteriormente, mediante la adopción de la Ley 1394 de 2010.

Así, el Proyecto de Ley No. 286 de 2007 Cámara - 023 de 2006 Senado, contemplaba una modificación sustancial de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en relación con el principio de gratuidad. En efecto, el artículo 2 del mencionado Proyecto de Ley establecía la siguiente modificación del artículo 6 de la Ley 270 de 1996:

***“Artículo 2°.** Modifíquese el artículo 6° de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:*

***Artículo 6°. Gratuidad.** La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.*

En los procesos contenciosos administrativos, comerciales y civiles de cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes se cobrará a cargo del demandante un arancel judicial hasta del 2% del valor de las condenas o cuantías ejecutadas en virtud de la intervención judicial, siempre y cuando el proceso se falle dentro de los términos de ley. No se admitirá excepción alguna a este principio. Por los términos de ley debe entenderse los días de duración del proceso que no hayan excedido en el número de días previsto por la ley para fallarlo. Cuando el

incumplimiento de los términos de ley para proferir sentencia ejecutoriada sea imputable a algunas partes, la que resulte responsable pagará el mismo arancel.

No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso-laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decreta el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley o el Consejo Superior de la Judicatura, o indiquen la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia o la Defensoría del Pueblo, en razón de la presencia de intereses públicos, de la limitación del acceso a la justicia, o de las circunstancias especiales de las partes que ameriten una protección legal.

El arancel judicial constituirá un ingreso público consistente en el pago a favor de la rama judicial de un porcentaje del valor obtenido en el proceso como resultado de la declaración o ejecución de derechos a fin de proveer los gastos necesarios para adelantar el proceso y contribuir a la mayor eficacia, descongestión y modernización de la rama, corporaciones y despachos judiciales.

Parágrafo. *Exclúyase el cobro de aranceles en los procesos ejecutivos de viviendas de interés social". (Subrayado fuera de texto)*

Como puede advertirse, en esta ocasión el Congreso de la República, a través de este Proyecto de Ley Estatutaria, incluyó de manera expresa el arancel judicial como una excepción al principio de gratuidad de la justicia. La Corte Constitucional³, en el proceso de revisión previa propio de las leyes estatutarias, de manera expresa avaló la constitucionalidad de la creación del arancel judicial, no obstante haber declarado la inexequibilidad por vaguedad debido a la manera como se estableció el procedimiento de recaudo del arancel. En otros términos, la Corte Constitucional avaló de fondo la creación del arancel, pero censuró la forma como el Congreso de la República diseñó la manera de recaudarlo (inexequibilidad por vaguedad), por tratarse de un aspecto con implicaciones directas desde el punto de vista fiscal e impositivo:

"6.- En cuanto al principio de gratuidad, esta Corporación ha considerado que si bien no tiene un expreso reconocimiento Constitucional, halla su origen "en los valores fundantes del Estado como son a la justicia, la convivencia, la paz, la igualdad y a un orden justo, a la vez que se deriva de la noción de justicia que apunta a la realización del principio de igualdad. Al respecto, en la sentencia C-037 de 1996, que analizó la norma sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia, la Corte sostuvo:

(...)

Sin embargo, en la misma providencia la Corte reconoció que el principio de gratuidad no es absoluto y puede ser objeto de restricciones, por lo que declaró la constitucionalidad de la expresión "sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales". (...)

³ Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

(...)

En decisiones posteriores la Corte ha señalado expresamente que el principio de gratuidad de la justicia no puede concebirse en términos absolutos, como por definición no lo es ningún principio o derecho constitucional. Con base en ello, ha declarado la exequibilidad de normas que imponen algunas cargas económicas con ocasión de un proceso judicial, incluso en escenarios sensibles como el derecho del trabajo, al advertir que “el principio de gratuidad en el proceso laboral no es absoluto.

Teniendo presente que el principio de gratuidad no irradia en forma incondicional, esta Corporación insiste en que “la discusión en este campo suele centrarse en las excepciones erigidas alrededor del alcance del aludido principio, toda vez que el mismo presenta limitaciones para su aplicación.

Desde esta perspectiva, el inciso primero del artículo 2º del proyecto, que hace una referencia genérica a los “aranceles judiciales que se fijan de conformidad con la ley”, es una regulación que en sí misma no genera un vicio de constitucionalidad, por cuanto es plausible que el Legislador imponga ciertas restricciones al principio de gratuidad de la justicia, desde luego dentro del marco de la Constitución y de las normas que se integran a ella.

A juicio de la Corte, la existencia de aranceles judiciales no resulta per se incompatible con la Constitución, dado que corresponde a una suerte de excepción al principio general de gratuidad de la justicia que no afecta el acceso a esa función pública. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 2º del proyecto.

Pero lo anterior no significa que toda regulación legal de los aranceles judiciales sea válida, pues bien puede ocurrir que su configuración concreta plantee deficiencias estructurales de orden constitucional, como en efecto ocurre con algunos apartes del artículo bajo revisión, según pasa a explicarse. En esa medida, lo que la Corte debe analizar ahora es si la configuración concreta del arancel judicial, prevista en los incisos y el párrafo siguientes del artículo bajo examen, se ajusta o no a los mandatos Superiores en materia fiscal.

(...)

8.- Conforme a su diseño en el proyecto, los aranceles judiciales se diferencian de las agencias en derecho, costas y expensas judiciales, en la medida en que su determinación no se origina en los gastos directos de un proceso. Por eso los recursos obtenidos no se destinan a cubrir las erogaciones surgidas con ocasión del proceso, sino que se proyectan para su reinversión en la Rama Judicial, lo que, según fue explicado anteriormente, se ajusta a la Constitución desde una perspectiva global.

9.- La indeterminación normativa puede dar lugar a la inconstitucionalidad de una regulación legal cuando su contenido y alcance sea materialmente incomprensible y por esa vía resulta contrario al principio de legalidad. En este sentido, como bien lo

señala la doctrina autorizada, “una ley, por tanto, que no cumpla el requisito de precisión puede ser considerada inconstitucional.

La regla que prohíbe la indeterminación normativa ha sido utilizada en el derecho comparado para exigir especial rigor en asuntos de orden penal. Por ejemplo, en el derecho norteamericano se le conoce como la doctrina de la nulidad por vaguedad (...)

En el caso colombiano, siguiendo la línea descrita, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado cómo en materia tributaria la indeterminación no sólo atenta contra la seguridad jurídica, sino contra el principio de legalidad (art.338 CP) y el sentido mismo de justicia (...)”⁴.

Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad por vaguedad del artículo 2 del Proyecto de Ley Estatutaria antes mencionado, y atendiendo la importancia de la materia, el Congreso de la República aprobó la Ley 1394 de 2010, por medio de la cual se creó el arancel judicial, como contribución parafiscal, para todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los recursos obtenidos por el arancel judicial serían destinados a contribuir en los gastos de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial, descongestión de los despachos judiciales y la implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales, al igual que se designó como administrador de los mismos al Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la constitucionalidad del establecimiento del arancel judicial, llevando a cabo el examen de exequibilidad nuevamente desde la perspectiva del principio de gratuidad de la justicia y del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia. En esta oportunidad⁵, el máximo Tribunal Constitucional reiteró su jurisprudencia previa en el sentido de considerar que la creación del arancel judicial, en modo alguno, infringe *per se* la Carta Política, pero además, a diferencia del fallido Proyecto de Ley Estatutaria, encontró exequible la forma en que fue concebido por el legislador se ajustaba igualmente a la Constitución. Señaló en esta oportunidad la Corte Constitucional:

“De este modo, no cabe duda, que el nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el artículo 1º y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia., que no es un principio absoluto. Sobre esta base, el legislador, dentro de un amplio margen de configuración (arts. 150, numerales 11 y 12 y 338 C.P.), se encuentra facultado para imponer válidamente restricciones al principio de gratuidad de la justicia, en este caso, por vía de implementación del arancel judicial, siempre que en su reglamentación no se violen los principios constitucionales.”

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 2011. M.P. Dr. Gabriel Mendoza Martelo

En esa línea, la Corte consideró que las características particulares atribuidas por el legislador al arancel judicial, llevan a descartar una violación de dichos principios, como quiera que el aludido gravamen persigue un fin constitucionalmente legítimo, como es el de contribuir a mejorar el funcionamiento del aparato judicial (art. 1º C.P.), el cual viene padeciendo problemas crónicos que han aumentado significativamente el atraso y la congestión en el sistema de justicia y para cuya solución es necesaria la consecución de recursos que desbordan la capacidad de asignar a la Rama Judicial, dada la escasez de ingresos públicos y la necesidad de invertir en otras áreas igualmente importantes. A la vez, presenta un margen de aplicación bastante reducido y sólo afecta a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia y no se cobra a quienes no cuentan con capacidad económica, porque se excluye a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisben y a quien solicite amparo de pobreza. Adicionalmente, en estricto sentido, el arancel judicial no viola el derecho de acceso a la administración de justicia, pues de acuerdo con su regulación, el particular no sufre ninguna restricción en el ejercicio del derecho de acción, como tampoco, en el desarrollo de la actuación procesal.”⁶

Valga decir además que, la Corte Constitucional mediante Sentencia C - 643 de 2011⁷ declaró la exequibilidad de la Ley 1394 de 2010 frente al cargo de requerir ley estatutaria todo lo relacionado con el arancel judicial. Es decir, en esta sentencia dejó en claro la Corte Constitucional, el hecho de que para diseñar un arancel judicial basta una ley ordinaria.

En este orden de ideas, Honorables Representantes, no cabe duda alguna acerca de la constitucionalidad de la norma que se somete a su consideración, toda vez que, como se pasa a explicar, lo que aquí se pretende es hacer un nuevo diseño, en *pro* de la efectividad de recaudo del arancel judicial hoy existente y declarado exequible por la Corte Constitucional.

C. NECESIDAD DE REFORMAR LA ACTUAL NORMATIVIDAD

Los suscritos Ponentes coinciden con la posición del Gobierno Nacional manifestada en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, en cuanto a la necesidad de reformar el régimen actual del arancel judicial. En efecto, a pesar de las buenas intenciones con las que el Congreso de la República aprobó la Ley 1394 de 2010, la realidad ha demostrado que la forma como se concibió el hecho generador del arancel judicial, supeditado al efectivo recaudo de las condenas económicas por parte del demandante, ha conllevado a grandes dificultades y frustraciones en el efectivo recaudo del arancel.

Así las cosas, el Proyecto de Ley plantea una reforma estructural consistente en rediseñar el hecho generador del arancel judicial, de forma tal que el demandante proceda a su pago al inicio del proceso, sujeto a un futuro reconocimiento por parte del juez al momento de liquidar las costas del proceso, en caso de resultar vencedor dentro del mismo.

De este modo, se superan los inconvenientes que se han advertido en la vigencia de la Ley 1394 de 2010, principalmente, los señalados en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley:

“Tal disposición normativa presenta varios inconvenientes a saber:

⁶ Corte Constitucional. Sentencia C - 368 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Gabriel Mendoza Martelo.

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C - 643 del 31 de agosto de 2011. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

- ✓ *No hay relación entre el recaudo por parte del demandante victorioso y el desgaste del aparato judicial. El aparato judicial se desgasta igual, con recaudo o sin recaudo del demandante.*
- ✓ *Quien temerariamente demanda ante la justicia no paga arancel, pues como no prosperan sus pretensiones, no tiene sumas por recaudar. Por esta razón, a pesar de que existe un desgaste efectivo de la administración de justicia, no hay lugar a recaudo y mucho menos al cobro del arancel.*
- ✓ *Implica que quien esta asistido de la razón y por ello obtiene la prosperidad de sus pretensiones y recaudo de los cobrados, sea quien tenga que pagar el arancel, lo cual no es lógico porque el arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió el litigio.*
- ✓ *Facilita que las partes del proceso eludan el pago de la contribución parafiscal, pues éstas, en ocasiones, con el fin de no sufragar el valor total del arancel, disfrazan la terminación de los procesos por pago, por la vía del desistimiento, desistimiento tácito, perención o simplemente abandono, acudiendo al cumplimiento extrajudicial (pago) de las obligaciones objeto del proceso judicial, lo cual es prácticamente imposible de supervisar y controlar.*
- ✓ *Genera una carga operativa adicional para la Administración de Justicia, pues en caso de que el demandante no pague o pague parcialmente la contribución, aquella, en aras de obtener el arancel judicial, deberá perseguir al evasor en un nuevo y engorroso proceso”⁸.*

Resulta apropiado resaltar también, que se corrige la inequidad que opera en la actual Ley 1394 de 2010, consistente en que el demandante victorioso, a quien la administración de justicia le ha dado la razón sobre sus reclamaciones, es quien debe asumir la carga impositiva del arancel judicial. Acudiendo a un principio de equidad, el Proyecto de Ley contempla que el arancel judicial sea tenido como un ingrediente más de las costas procesales que deberá asumir la parte que resulte vencida en el juicio.

E. CONSECUENCIAS Y BENEFICIOS DEL ARANCEL JUDICIAL Y LA REFORMA

De acuerdo con las estimaciones que se realizaron durante el trámite legislativo de la Ley 1394 de 2010, al establecer un arancel judicial con una tarifa del 2% para los procesos civiles cuya cuantía superara los \$ 100 millones de pesos, se esperaba recaudar alrededor de **DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS (\$200.000.000.000)**, partiendo del supuesto que el recaudo se realizaría al momento del cobro efectivo de las condenas dinerarias de la sentencia, en los procesos en donde éste se causara.

De acuerdo con las Tablas 4 y 5 que se muestran a continuación, de verificarse en la realidad el cumplimiento de dicha meta, el recaudo representaría por esta vía en un incremento de cerca del 10%

⁸ Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 019 de 2011 Cámara “Por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones”

del presupuesto del Sector Jurisdiccional⁹. Adicionalmente, más representativo aún resulta el impacto que tendría un recaudo de esta naturaleza en el presupuesto de inversión del Sector Jurisdiccional, toda vez que representaría un incremento de cerca del 100%, en comparación con el presupuesto establecido para este mismo rubro en el 2011. Veamos:

Tabla No. 4
Presupuesto de la Rama Judicial¹⁰ y del Sector Jurisdiccional 2000 -2011

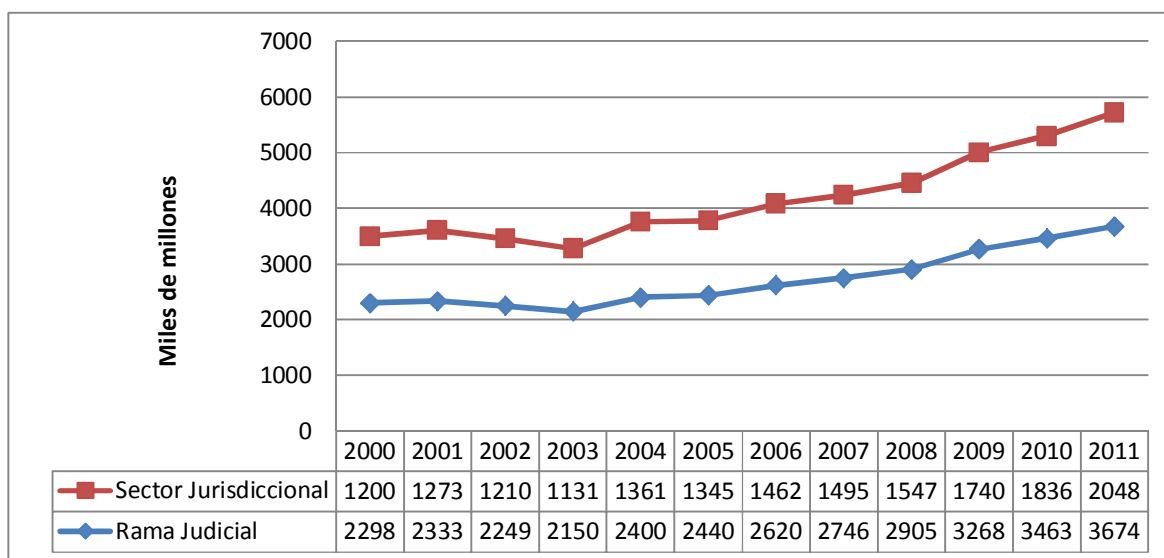
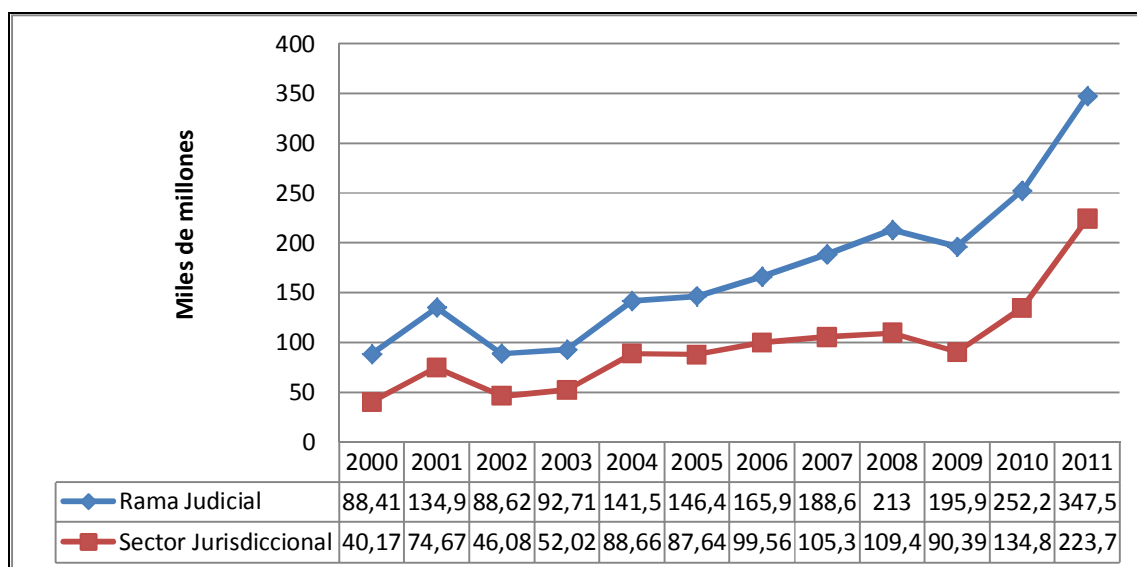


Tabla No. 5
Presupuesto de inversión de la Rama Judicial y del Sector Jurisdiccional 2000 -2011



⁹ El Sector Jurisdiccional está conformado por las Altas Cortes, los tribunales y juzgados del país

¹⁰ La Rama Judicial es el Sector Jurisdiccional más la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

No obstante las evidentes ventajas que se derivarían de un efectivo ingreso del arancel judicial a las arcas del presupuesto de la Rama Judicial, las cifras proporcionadas por el Consejo Superior de la Judicatura dan cuenta de un exiguo recaudo cercano a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350.000.000) para lo que va corrido del 2011, cifra ostensiblemente lejana a lo inicialmente esperado (es decir, casi una dosmilésima parte de lo esperado). Así las cosas, el Proyecto de Ley presenta evidentes ventajas desde el punto de vista económico que redundarían en beneficio de una administración de justicia fortalecida en lo presupuestal.

Finalmente, el Proyecto de Ley presenta significativas ventajas, todas ellas mencionadas en la Explicación de Motivos presentada por el Gobierno Nacional, en el sentido de corregir las siguientes deficiencias del actual régimen:

- ✓ Teniendo en cuenta que el desgaste del aparato jurisdicción es independiente del efectivo recaudo de las condenas económicas, se modifica este aspecto como parte del hecho generador de la contribución.
- ✓ Implica que quien esta asistido de la razón y por ello obtiene la prosperidad de sus pretensiones y recaudo de los cobrado, sea quien tenga que pagar el arancel, lo cual no es lógico porque el arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió el litigio.
- ✓ El arancel judicial al inicio del proceso funcionaría como una especie de control frente a demandas temerarias. Baja el actual esquema, quien interponga una demanda temeraria no debe pagar el arancel, habida cuenta que no existe un recaudo efectivo de condenas por la sencilla razón que sus pretensiones no prosperan.
- ✓ Se controla la elusión y evasión del arancel por las partes, cerrando el paso al uso de mecanismos aparentemente legales -como la transacción, el desistimiento o el desistimiento tácito- para el pago de la contribución parafiscal.
- ✓ Libera a la Administración de Justicia de la carga operativa adicional de supervisar y controlar el pago del arancel posterior a la emisión de la sentencia. Esta medida está a tono con la actual coyuntura de Reforma Constitucional a la Justicia, reforma que en sí misma, justifica el presente Proyecto de Ley.

MODIFICACIONES PARA SEGUNDO DEBATE

Teniendo en cuenta que se hace necesario realizar ciertos ajustes en algunos artículos del Proyecto de Ley, sugeridos éstos durante el Primer Debate en la Comisión Tercera de la H. Cámara de Representantes, nos permitimos presentar de manera integrada el texto del Proyecto de Ley, en el que constan los siguientes cambios:

Artículo 5: Se introducen varios cambios en este artículo del Proyecto, en el sentido de modificar la excepción total de pagar el arancel judicial en aquellos procesos iniciados por personas de escasos recursos pertenecientes a los niveles de Sisbén 1 y 2 o con amparo de pobreza y en los procesos contencioso administrativos con pretensiones patrimoniales, diferentes de los contencioso laborales.

Las reglas que se introducen son las siguientes:

(i) En los procesos iniciados por personas de escasos recursos pertenecientes a los niveles de Sisbén 1 y 2 o con amparo de pobreza, el arancel judicial se causará al final del proceso y únicamente, en el evento de que prosperen las pretensiones de la demanda. En este caso, su pago estará a cargo del demandado vencido en el proceso, es decir, a cargo de quien no está amparado en pobreza o de quien no pertenece a los niveles de Sisben 1 y 2. Se reitera, el arancel judicial se cobraría en los procesos en que es demandante un amparado en pobreza o un ciudadano perteneciente a los niveles de Sisben 1 y 2, pero no a cargo de él.

La base gravable del arancel judicial no lo será las pretensiones económicas de la demanda sino las condenas dinerarias efectivamente declaradas en la sentencia, por cuanto en caso de existir diferencia entre las pretensiones y la condena, sería ilógico que el demandado vencido tuviese que pagar con base en la exageración de su demandante. Con esta modificación, se mantiene la protección para personas de escasos recursos que quieran acceder a la administración de justicia, pues en ningún evento pagarían arancel judicial, en armonía con lo establecido en la Sentencia C - 368 de 2011¹¹ antes citada.

(ii) Se contempla la misma regla de causación y pago del arancel judicial referida para las personas de escasos recursos pertenecientes a los niveles Sisbén 1 y 2 y con amparo de pobreza aplica para los procesos contenciosos administrativos diferentes de los contencioso laborales, en donde el demandado sea un particular.

Dicho de otra manera, en los procesos contencioso administrativo el arancel judicial no es pagado por la entidad pública demandante sino por el particular demandado y vencido, calculada la contribución parafiscal con base en el monto de las condenas.

(iii) Cuando en un proceso contencioso administrativo (que no sea contencioso laboral) el demandante sea un particular, el arancel judicial se causará y pagará de conformidad con las reglas generales previstas en la presente ley (2% de las pretensiones económicas al momento de presentar la demanda). Sin embargo, en caso de que la sentencia que ponga fin al proceso acoja total o parcialmente sus pretensiones, se establece la regla según la cual tendrá derecho a que en la misma sentencia, el juez ordene la devolución proporcional (de acuerdo con el porcentaje de las pretensiones acogidas) del arancel judicial pagado.

Artículo 6. Se adiciona el inciso final del artículo con una precisión en el sentido de que, al momento de liquidar las costas del proceso, solo podrá incluirse el valor pagado por concepto de arancel, sin tener en cuenta las sanciones que se hubieren podido imponer por la indebida obtención de cualquier excepción prevista en el artículo 5 mediante el uso de información o documentación falsa o adulterada o cualquier otro medio fraudulento, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del mismo artículo 5 mencionado.

Artículo 8. Se incorpora un parágrafo para establecer que las reglas previstas para el juramento estimatorio aplican, sin excepciones, para todas las jurisdicciones.

¹¹ Corte Constitucional. Sentencia C - 368 del 11 de mayo de 2011. M.P. Dr. Gabriel Mendoza Martelo

Artículo 10. Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el artículo 5, se requiere retomar la norma prevista en el artículo 10 de la Ley 1394 de 2010 de acuerdo con la cual el juez, una vez en firme la sentencia que imponga el pago del arancel judicial, deberá remitir una copia de la misma a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de procurar el pago del referido arancel. En este mismo sentido, se establece que la sentencia prestará mérito ejecutivo.

Obviamente, se trata de una situación excepcional, por cuanto, precisamente este proyecto, pretende el recaudo del arancel al momento de la presentación de la demanda.

A continuación el siguiente cuadro explica, de manera integrada, los cambios que sufre el articulado con este Informe de Ponencia y que constituyen el Pliego de Modificaciones:

Texto Aprobado en Primer Debate Comisión Tercera de la Cámara de Representantes	Ponencia Segundo Debate Plenaria de la Cámara de Representantes
<p>Artículo 5. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, <u>contencioso administrativos</u>, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.</p> <p><u>Tampoco podrá cobrarse el arancel judicial a las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2, condición que será acreditada con el</u></p>	<p>Artículo 5. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.</p> <p>Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos -CISA-, cuando éste intervenga como titular en procesos judiciales.</p> <p><u>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.</u></p> <p><u>En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1 y 2 o con amparo de pobreza, el pago del</u></p>

respectivo carné, ni a las personas de escasos recursos cuando se decreta el amparo de pobreza, de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento Civil. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar.

Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos -CISA-, cuando éste intervenga como titular en procesos judiciales.

Parágrafo primero. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo segundo. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que éste hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante

arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable será las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1 y 2, acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2 y con amparo de pobreza.

Parágrafo primero. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo segundo. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que éste hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante

<p>en garantía, del denunciante del pleito, del <i>ad excludendum</i>, y de todo aquél que ejerza una pretensión de contenido dinerario.</p> <p>El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.</p> <p>El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previstos en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes.</p>	<p>en garantía, del denunciante del pleito, del <i>ad excludendum</i>, y de todo aquél que ejerza una pretensión de contenido dinerario.</p> <p>El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.</p> <p>El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previstos en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. <u>Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el párrafo primero del artículo 5 de la presente ley.</u></p>
<p>Artículo 8. Adiciónese dos incisos finales al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:</p> <p><i>“El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.</i></p> <p><i>La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación de los daños inmateriales que deba ser</i></p>	<p>Artículo 8. Adiciónese dos incisos finales <u>y un párrafo</u> al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:</p> <p><i>“El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.</i></p> <p><i>La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación de los daños inmateriales que deba ser</i></p>

<p>realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda.”</p>	<p>realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda.</p> <p><u>Parágrafo. Lo previsto en este artículo aplica para todas las jurisdicciones”</u></p>
<p>Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.</p>	<p>Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p><u>Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.</u></p> <p><u>Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial mérito ejecutivo.</u></p> <p><u>Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.</u></p>

PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los Honorables Representantes a la Cámara, darle Segundo Debate y aprobar, con las modificaciones propuestas en el Pliego de Modificaciones que se **adjunta**, el Proyecto de Ley No. 019 de 2011 Cámara “*Por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones*”.

Cordialmente,

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
H. Representante a la Cámara
Ponente

CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX
H. Representante a la Cámara
Ponente

**PLIEGO DE MODIFICACIONES
SEGUNDO DEBATE
PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES**

Proyecto de Ley No. 019 de 2011 Cámara
“Por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Gratuidad de la justicia. La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijan de conformidad con la ley.

Artículo 2. Naturaleza jurídica. El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3. Sujeto activo. El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.

Artículo 4. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones de la presente Ley.

Artículo 5. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.

Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos -CISA-, cuando éste intervenga como titular en procesos judiciales.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1 y 2 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable será las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1 y 2, acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2 y con amparo de pobreza.

Parágrafo primero. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo segundo. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que éste hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvencción en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del *ad excludendum*, y de todo aquél que ejerza una pretensión de contenido dinerario.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previstos en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo primero del artículo 5 de la presente ley.

Artículo 7. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberá liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 8. Adiciónese dos incisos finales y un párrafo al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:

“El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación de los daños inmateriales que deba ser realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

Parágrafo. *Lo previsto en este artículo aplica para todas las jurisdicciones”*

Artículo 9. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento (2%) de la base gravable.

Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley, serán considerados créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

Artículo 11. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

Artículo 12. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial del que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que la administración y la gestión se realicen a través del sistema financiero.

Artículo 13. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la administración de justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales, sin perjuicio de las funciones de control que corresponda a la Contraloría General de la Nación.

Artículo 14. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se registrarán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
H. Representante a la Cámara
Ponente

CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX
H. Representante a la Cámara
Ponente